

**LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN HONDURAS<sup>1</sup>**

IGNACIO MEDINA NUÑEZ  
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

De manera casi tradicional, la República de Honduras ha conservado por muchos años los más altos índices de pobreza en toda América Latina para formar junto con Haití, Bolivia y Nicaragua, el cuarteto de naciones más atrasadas<sup>2</sup>. "Las estadísticas indican la enorme magnitud del subdesarrollo en Honduras. Sólo 10% de los hondureños rurales (que son el 60% de la población) tiene electricidad. Siete de cada 10 hondureños viven en condiciones de pobreza extrema y menos del 15% de los campesinos hondureños tienen acceso al agua potable" (Barry and Preusch, 1986:251). La pobreza, además, se convierte en un proceso que se va acentuando con el devenir de los años, aun en el tiempo de los años 80s cuando el país se vio invadido de cuantiosas inversiones norteamericanas en cuarteles militares que convirtieron al país en el soporte y avance de los contrarrevolucionarios nicaraguenses en la guerra contra el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Dice, por ejemplo, un documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH): "la pobreza puede catalogarse como el principal problema del país... Somos un país con bastante pobreza. Lo sabemos porque lo hemos medido por todos los métodos utilizados internacionalmente, tanto desde el punto de vista del método del ingreso como el de necesidades básicas o el método integrado... Entre 1988 y 1991, los niveles de pobreza pasaron de 68% de los hogares a 74% respectivamente. Significa entonces, que la pobreza de la población hondureña es de carácter estructural pero que se ha visto agravada por factores coyunturales

---

1

PREPARED FOR DELIVERY AT THE 1998 MEETING OF THE LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION. THE PALMER HOUSE HILTON HOTEL. CHICAGO, ILLINOIS. SEPTEMBER 24-26, 1998

2

Honduras tiene 5.6 millones de habitantes, una mortalidad infantil de 49 por cada mil nacidos vivos y un ingreso per capita anual de 590 dólares. Haiti tiene 6.7 millones de habitantes, una mortalidad infantil de 93 por cada mil nacidos y un ingreso per capita de 380 dólares anuales; Nicaragua tiene 4.2 millones de habitantes, una mortalidad infantil de 53 por cada mil nacidos y un ingreso per capita de 410 dólares anuales; Bolivia tiene 8 millones de habitantes, una mortalidad infantil de 82 por cada mil nacidos y un ingreso per capita de 680 dólares anuales.

ya sean estos de origen interno o externo" (CONADEH, 1996).

Una editorial del seminario católico FIDES, en Noviembre de 1996, expresaba también una opinión semejante: "En la actualidad, la sociedad hondureña está enfrentada a nuevas situaciones generadoras de violencia. el aumento en el nivel de pobreza de la población. La disminución en la capacidad del Estado para atender las necesidades crecientes de educación, salud y seguridad. La ausencia de una estrategia de desarrollo a largo plazo, que le confiera dirección y contenido al esfuerzo productivo de la nación" (FIDES, 1996).

Esta es una situación que no proviene en su origen del modelo neoliberal (aunque éste la haya agravado todavía más) que se ha impuesto en América Latina desde la década de los 80s sino que tiene sus raíces en décadas anteriores que se remontan hasta el siglo XIX, cuando Honduras empezó a cumplir el papel de ser una república bananera de los Estados Unidos. Las compañías bananeras (especialmente la United Fruit Company-United Brands) hicieron y deshicieron en Honduras, poniendo e imponiendo presidentes y dictadores acordes a su política económica. Solamente la gran huelga de 1954 de los trabajadores bananeros de la United Fruit pudo impulsar algunas mejoras salariales y la demanda de una reforma agraria; ésta fue débilmente iniciada por el gobierno de Villeda Morales en 1962, en el marco de la Alianza para el Progreso y preparando primer intento de integración centroamericana, pero con muchas reticencias y contradicciones con el Departamento de Estado de E.U. y con la United Fruit.

En un intento por diversificar la economía e iniciar la modernización del país, el General Oswaldo López Arellano retomó la bandera de la reforma agraria y anunció el primer Plan Nacional de Desarrollo, en 1972. Las expectativas fueron frustradas por el "Banana-gate": se conoció públicamente que funcionarios del gobierno habían sido corrompidos por los sobornos económicos de la United Fruit; López Arellano tuvo que dejar el poder en 1975.

El Coronel Juan A. Melgar Castro tomó la dirección del país y profundizó una militarización caracterizada por corrupción, enriquecimiento de militares y represión de la población sobre todo en el campo. "Con Melgar Castro en el poder, la corrupción militar lo mismo que la represión del Ejército estaban a la orden del día. Solamente unos pocos militares del alto mando en los 70s no se habían convertido en millonarios" (Barry and Preush, 1986:254). Todo esto volvió a afinanzar la estructura tradicional de Honduras basada en terratenientes ligados al mercado interno y grandes terratenientes ligados a la agroexportación, sin esperanzas de un verdadero desarrollo industrial.

El golpe militar del General Policarpo Paz en 1978 en contra de Melgar Castro sólo parecía fruto de contradicciones internas entre los militares, pero, a raíz del triunfo del FSLN en la vecina Nicaragua en Julio de 1979 y el crecimiento político militar del FMLN en El Salvador, el gobierno norteamericano empezó a otorgarle otro papel a Honduras involucrándolo de lleno en el conflicto centroamericano. Por un lado, se promovió en Honduras un proceso de democratización formal que pusiera a los civiles en el poder, y por otro, sobre todo en la nueva época de Ronald Reagan en los Estados Unidos, el país fue convertido en la práctica en un área de bases militares norteamericanas.

Se realizó en 1981 un proceso electoral que otorgó la presidencia a Roberto Suazo Córdoba, del Partido Liberal. El gobierno civil empezó a cumplir plenamente la función asignada por los Estados Unidos, pero intentando dejar atrás la imagen de un país controlado por militares. En otras palabras, el nuevo gobierno civil se encargó de profundizar la militarización del país; una expresión de ello fue, por ejemplo, el crecimiento de los efectivos de las fuerzas Armadas de 11,000 a 25,500 en 1985.

El Presidente Suazo, además, nombró como jefe del Ejército, al General Gustavo Alvarez (entrenado en Argentina por el régimen militar), quien, al mismo tiempo, realizaba la represión al interior de Honduras y se convertía en el arquitecto de la conversión del país como base de operaciones de Estados Unidos. "El nuevo jefe de las Fuerzas Armadas era un militar de corte fascista, directamente involucrado en la formación de Escuadrones de la Fuerte, destinados a eliminar a la oposición política y uno de los principales protagonistas en la escalada represiva observada con Suazo Córdoba. Fue también el partidario número uno en la desestabilización de Nicaragua y responsable de gran cantidad de hechos represivos" (Lailson S., en Medina, 1997:70).

La retribución a Honduras por esta política se expresó en los programas de asistencia de la Agency for International Development (AID) que, con 572 millones de dólares autorizados por los Estados Unidos entre 1980 y 1985, se convirtieron en una "lluvia de dólares" a cambio del uso del territorio y del apoyo a "la contra" nicaraguense (Cfr. Barry and Preush, 1986:258).

La misma política fue continuada después de las elecciones de Noviembre de 1985 por José Azcona Hoyo, del mismo Partido Liberal, nuevo presidente electo y quien había sido en 1981 coordinador de campaña de Suazo Córdoba. En la coyuntura de la guerra en Nicaragua y en El Salvador, el papel de Honduras consistió en convertirse en el canal para cumplir la estrategia de los republicanos en la Casa Blanca de los Estados Unidos: hubo una cooperación servil a los dictados de Washington a cambio de ayuda económica; creció más la

militarización en el país; las demandas de los trabajadores en la ciudad y el campo continuaban en lista de espera; la política económica de Honduras se acoplaba al modelo neoliberal con pesados paquetes de austeridad para la población.

Los tres hombres fuertes en Honduras durante esa década de los 80s eran indudablemente el Presidente de la nación, el Jefe de las Fuerza Armadas y el Embajador de Estados Unidos en el país. "En cuatro años de gobierno de Azcona, Honduras se convirtió en base fija de operaciones de Estados Unidos en la región; con sus maniobras logró una presencia permanente: con 17 bases y 10 pistas de aterrizaje (además del aeropuerto internacional), donde podían aterrizar con facilidad aviones C-130, que poseen gran capacidad de transporte de carga. Las pistas se ubicaban en las fronteras de Nicaragua y El Salvador" (Lailson S., en Medina, 1997:76). "La base aérea de Palmerola tiene capacidad para recibir cualquier avión de la flota de combate y transporte de la fuerza aérea norteamericana, incluidos el F-15 y el C-5A (Galaxie). Otras tres pistas pueden recibir aviones de combate y transportes C-130; el resto de las pistas (trece, en total) pueden recibir los Hércules c-130)" (Vergara et al., 1987:108). La política hondureña estaba determinada por la estrategia estadounidense contra Nicaragua: "El gobierno hondureño siguió siendo el principal puntal de la estrategia norteamericana en la región; en ello influyó, desde la perspectiva estadounidense, la histórica subordinación de Honduras y el rol decisivo que dicho país juega respecto a la "contra" y, desde las expectativas locales, la obtención de mayores beneficios económicos" (Inseh, en Cecari, 1987:59).

La visión particular de Honduras como un estado subordinado a los Estados Unidos y, además, la situación particular de persistencia de represión interna, militarización y pobreza en una economía de enclave generaron mucha oposición interna en la población hondureña. De hecho, aunque no tuvieron posteriormente una presencia política significativa, también aparecieron en Honduras organizaciones guerrilleras con diversas acciones militares: el Frente Morazanista de Liberación de Honduras (FMLH), el Movimiento Popular de Liberación "los Cinchoneros" (MPL), y las Fuerzas Populares de la Revolución (FPR), y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC). También, la presión internacional sobre el proceso de paz centroamericano llevó a que el presidente Azcona se involucrara en los documentos de Esquipulas firmados por todos los presidentes centroamericanos, en donde, entre otras cosas, se exigía el desmantelamiento de los contrarrevolucionarios nicaraguenses en territorio hondureño, que se calculaban ser alrededor de 13,000 en 1989.

El desgaste del Partido Liberal, sin embargo, era irreversible

sobre todo en relación a dos temas: la pérdida de la soberanía a través de un gobierno entregado totalmente a las decisiones de Washington, y la deteriorada situación económica del país que pesaba cada vez más sobre los sectores más desprotegidos. Lo primero era evidente en un país ocupado por las bases militares norteamericanas; lo segundo la población lo experimentaba en carne propia: "En un país campesino, la producción de maíz, frijol, plátano y arroz había caído drásticamente en los últimos años de gobierno del Partido Liberal y los precios de los alimentos, que gozaron de estabilidad durante la década, registraron una inflación de un 11% en 1988, particularmente en los 6 meses anteriores al arranque de la campaña" (Envío, No. 103, 1990:50).

El Partido Liberal con su candidato Carlos Flores Lacussé perdió las elecciones del 26 de Noviembre de 1989, con escaso margen, con un voto de castigo de la población; subió al poder el presidente Rafael Leonardo Callejas, del Partido Nacional (51% para Callejas y 43% para Carlos flores). Callejas, un economista y empresario conservador ligado a la derecha en el país, había sido ministro de gobierno con los regímenes militares en los 70s; había sido candidato a la vicepresidencia en 1981 por el Partido Nacional frente a Suazo Córdova, y había sido candidato a la presidencia, en 1985, frente a Azcona Hoyo. De hecho, Callejas, en la práctica, desarrolló desde 1986 un Pacto de Unidad Nacional con Azcona Hoyo respaldando la política norteamericana en Honduras y aprovechando los financiamientos de la AID, pero quien fue castigado en el proceso electoral de 1990 fue el Partido Liberal, ya que el Partido Nacional ofrecía un cambio.

El nuevo presidente de Honduras enfrentaba una nueva coyuntura: el proceso de paz de Esquipulas que exigía el desmantelamiento de la contra nicaraguense, en un contexto mundial en donde estaba desapareciendo el comunismo internacional (fin del socialismo de Europa del Este y desaparición de la URSS) como eje de la confrontación Este-Oeste. Pero era también la ocasión para plantear con más claridad un modelo económico neoliberal en cuanto acoplamiento a las directrices de los organismos financieros internacionales. En la nueva coyuntura, la plataforma militar de Estados Unidos en Honduras tendría que ser modificada mientras que el FMI y el Banco Mundial exigían en carta de intención la devaluación de la moneda, el aumento de impuestos a productores y consumidores, congelar salarios de empleados públicos, privatizar las empresas estatales.

En las nuevas circunstancias, Callejas empezó a desarrollar un difícil programa de gobierno: intentó reducir en 10% el presupuesto de los militares, devaluó la moneda nacional, el lempira, en 100% con relación al dólar, y aumentó los impuestos a la población en general. El país, además, seguía conservando la estructura de una

república bananera, sin reforma agraria y sin desarrollo industrial, con lo cual su inserción en el mercado mundial siguió siendo muy limitada.

En la etapa de los gobiernos civiles, Honduras se ha acercado al bipartidismo, en donde los dos partidos fundamentales, el Liberal y el Nacional, coinciden en el mismo modelo neoliberal de país y sólo se reparten cotos de poder. La oposición popular o de centro izquierda no ha aparecido con fuerza en los 90s ya que las pequeñas organizaciones campesinas y laborales han estado totalmente atomizadas y sin fuerza, después de la terrible represión que sufrieron en los primeros años en los 80s. Por ejemplo, "durante 1990, el enfrentamiento del movimiento popular hondureño con el programa del gobierno de Callejas cosechó pocos resultados en los 4 frentes principales de lucha: 1) la defensa del trabajo y de los niveles salariales de los empleados públicos, 2) la huelga de los trabajadores bananeros contra las empresas trasnacionales, 3) la protesta de las cúpulas de las organizaciones campesinas contra políticas agrarias que impiden que el campesinado mejore los niveles de producción y productividad de granos básicos, y 4) la anulación de la ley antiterrorista y la amnistía general para los prisioneros políticos. En cada una de estas 4 áreas, el movimiento popular fracasó en su intento de lograr una concertación que beneficiara a las clases populares" (Envío, no. 112/113, 1991:28). Sólo hasta 1993, con ocasión de la marcha del primero de Mayo, hubo un repunte significativo de protesta cuando unas 10,000 personas lograron reunirse bajo las demandas de la "Plataforma de Lucha por la Democratización de Honduras", a diferencia de las organizaciones que apoyaban al gobierno alrededor de la oficialista Central General de Trabajadores (CGT).

La principal contradicción política durante el gobierno de Callejas parece haber sido el ritmo de aplicación de los paquetes de ajuste económico y, sobre todo, la resistencia de los militares para acoplarse a la nueva situación centroamericana posterior a la guerra. El ejército siguió manejando la amenaza de la subversión interna<sup>3</sup> y de los enemigos externos (el ejército de Nicaragua y el ejército de El Salvador) para mantener su presupuesto a pesar de

---

3

Un coronel del Ejército, Alvaro Armilo Reyes, se expresó así sobre las protestas de la población contra el paquetazo económico del gobierno: "las organizaciones populares sirven de fachada de los que trabajan por desestabilizar y destruir la democracia en Honduras". También el General Arnulfo Cantarero se expresó de la siguiente manera: "la democracia no se mantiene con letras ni con violines, se mantiene con las armas" (Cfr. Envío, nos.112/113, 1991:30).

que disminuía la ayuda militar norteamericana a Honduras<sup>4</sup>. De hecho, Callejas fracasó en su intento de disminuir el presupuesto del Ejército; más bien tuvo que pedir su ayuda cuando en el primer año de su gobierno había muchas protestas populares por el alza del costo del transporte urbano y por la huelga de los trabajadores en las empresas bananeras.

El gobierno había cedido a las exigencias de los militares, pero de nuevo el papel del Ejército en Honduras fue seriamente cuestionado en el último año de Callejas cuando fue asesinado el dirigente de una empresa comercializadora de acero, en San Pedro Sula, y cuando sufrió atentado contra su vida el periodista José Eduardo Coto; sectores del Ejército aparecieron implicados por el Comité de Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) y por el diario El Tiempo, en estos atentados. Ramón Custodio, presidente del CODEH, acusó a los militares de "narcotraficantes, robacarros y asesinos por encargo". De hecho, un coronel del Ejército, Wilfredo Leva, fue apresado por liderar una banda que robaba automóviles y que estaba implicado en el narcotráfico. Por otro lado, el enriquecimiento de numerosos militares en décadas anteriores los había llevado a intervenir de manera activa en actividades empresariales originando contradicciones serias con la Asociación Nacional de Industrias (ASI) y con líderes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP). "A través del Instituto de Previsión Militar (IPM), los militares se han convertido en propietarios de un banco, de una compañía aseguradora, de una de las dos fábricas de cemento que existen en el país, de una empresa que fabrica ropa, zapatos y artículos de lona, de una funeraria y de una radioemisora. Ahora aspiran a quedarse con la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), cuya privatización fue anunciada por el presidente Callejas a finales de Enero -1993-" (Envío, no. 136, 1993:50).

En 1993, casi al final de su gobierno y en la perspectiva de las próximas elecciones, el presidente Callejas se preocupó de publicitar los éxitos del modelo económico, al igual que lo intentaban hacer los presidentes de otros países latinoamericanos como México, Perú, Argentina, Chile, etc. Se hablaba de los indicadores macroeconómicos, del control de la inflación (en

---

4

"En 1981, la ayuda militar de los Estados Unidos a Honduras fue de 9 millones 100 mil dólares. En 1986, que fue el punto más alto de la curva, alcanzó la cifra de 81 millones 140 mil dólares. En 1990, la ayuda militar norteamericana fue de 21 millones 140 mil dólares. Ya en 1991, la ayuda había descendido a 16 millones 270 mil dólares. Y en 1992, cayó a sólo 12 millones 700 mil dólares" (Envío, no.136, 1993:50).

Honduras, en 1992, se llegó al 6%, la más baja en toda América Latina), de la atracción del capital extranjero, de la estabilidad del lempira, la moneda nacional, en su cambio con respecto al dólar; el gobierno hablaba del futuro prometedor para Honduras bajo el esquema neoliberal cuando el presente en ese momento seguía siendo el aumento de la pobreza y la disminución del poder adquisitivo de la población. "En 3 años, el salario real de los hondureños se ha reducido en casi un 60%" (Envío, no.134, 1993:34).

Las críticas más fuertes al gobierno del Partido Nacional provenían obviamente del Partido Liberal: el ajuste fue excesivo y doloroso para la población; el libre comercio ha traído mucha importación de mercancías pero no se ha mejorado la producción del país; se ha priorizado el pago de la deuda externa con detrimento de las necesidades nacionales; no se ha desarrollado un sector industrial en el país, etc. En un intento por calmar las críticas negativas a su programa de ajuste, Callejas hizo renunciar al Ministro de Economía, Ramón Medina Luna, y al ministro de Hacienda, Benjamín Villanueva, los llamados "Chicago Boys hondureños", principales instrumentadores del modelo impulsado por el Presidente. Sin embargo, una nueva devaluación del lempira, un nuevo aumento de precios y numerosas acusaciones de corrupción gubernamental y de impunidad de los militares marcaron definitivamente la suerte del nuevo candidato del Partido Nacional, Oswaldo Ramos Soto, para las elecciones presidenciales, quien se enfrentaba al candidato del Partido Liberal, Roberto Reina.

El Partido Liberal ganó las elecciones<sup>5</sup> de Noviembre de 1993, y volvió a tomar la presidencia del país mediante una crítica acerva al modelo de ajuste neoliberal implementado por el conservador Partido Nacional a partir de Marzo de 1990. Como gobierno, el PN, conservador y vinculado a los militares, había centrado su campaña contra Roberto Reina y su hermano Jorge Arturo, calificándolos de comunistas y queriendo sembrar en la población el temor a la guerra, a que el futuro gobierno del PL arrebatara a los hijos de sus familias y racionara la alimentación; el candidato del PN Ramos Soto afirmaba: "son ateos, izquierdistas"<sup>6</sup>. El PL, por su

---

5

Este proceso electoral costó 7.8 millones de dólares. El Tribunal Nacional de Elecciones (TNE) hondureño aprobó la cantidad de 4.8 millones mientras que los otros 3 restantes fueron aportados como contribución de la Agency for International Development (AID) (LADB archives: 03/25/93).

6

El PN había mostrado fotos de Jorge Arturo Reina en visitas a Cuba y a Nicaragua en donde aparecía abrazando a funcionarios del



parte, atacaba al PN calificándolo de fascista y dominado por los militares y responsable de matanzas y desapariciones en Honduras. Reina particularmente criticó acervamente el programa económico de Callejas: en 1993, decía, eran 7 de cada 10 hondureños quienes vivían abajo de la línea de la pobreza; en 1993 ya eran 8 de cada 10. Reina prometía elevar la producción, la exportación y modernizar el campo; respecto de los militares, prometía que el Ejército estaría sometido al poder del gobierno civil (LADB archivos: 11/19/1993)

Como se esperaba, el Partido Liberal surgió victorioso de las elecciones generales del 28 de Noviembre en Honduras, ganando la presidencia, consiguiendo una mayoría en el Congreso de los legisladores y obteniendo control sobre muchas municipalidades, incluyendo la alcaldía de Tegucigalpa. Los resultados le otorgaban a Reina el 51.72% de los votos (822,667); Oswaldo Ramos logró el 41.52% (660,570) mientras que el Partido de Innovación y Unidad nacional (PINU) con su candidato Olbán Valladares lograba apenas el 2.81% (44,772 votos), y Orlando Iriarte del Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH) sólo el 1.08% (17,279 votos). Hubo una abstención del 35%<sup>7</sup>, en un universo de 2.7 millones de votantes: sólo 1.6 millones de votos válidos (junto con los votos anulados, la abstención nacional subía hasta el 40.7%). En el congreso, el PL obtuvo 71 escaños; el PN sólo alcanzó 55; el PINU obtuvo 2 escaños, y el PDCH ninguno. El PL, además, llegó a controlar el 60% de los municipios, y 12 de los 18 departamentos del país. Reina tomó posesión el 27 de Enero de 1994.

Los sectores de izquierda en Honduras, ligados algunos con las incipientes organizaciones guerrilleras que habían querido surgir en los 80s pero que fueron destrozadas, no habían logrado participar legalmente en los procesos electorales. Muchos dirigentes se encontraban fuera del país o en la clandestinidad; otros habían regresado acogidos a leyes de amnistía, pero el ambiente de represión del ejército continuaba: como muestra de ello, por ejemplo, el 24 de Noviembre de 1993, había sido asesinado Rigoberto Quezada, en San Pedro Sula, bajo el esquema típico de los escuadrones de la muerte. Quezada había sido dirigente del Partido Comunista de Honduras y había regresado al país en 1991 bajo un programa de amnistía. Estaba formando con otros el Partido de Unificación Democrática (PUD), preparando

---

gobierno cubano y del antiguo régimen sandinista en Nicaragua.

7

En las elecciones de 1985 se había registrado solamente un abstencionismo del 6%, pero en el proceso electoral de 1989 ya había aumentado al 23%.

apenas una participación política para las elecciones de Noviembre de 1997 (LADB archivos: 11/25/93).

De hecho, gran parte de la población tenía razones para depositar esperanzas en el gobierno del PL. Reina era un experto en leyes internacionales, había estado, de 1979 a 1985, como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Anteriormente había participado, en 1944, contra la dictadura de Tiburcio Cañas y estuvo preso por oponerse a la dictadura y pasó luego al exilio en El Salvador.

Muchos analistas, incluidos diversos miembros del PN interpretaron las elecciones como un voto de castigo por el programa neoliberal. Ramon Custodio, presidente de la CODEH aseguró que los votantes rechazaron el programa económico neoliberal del gobierno de Callejas que sólo había beneficiado a las élites, había empobrecido a la clase media y había vuelto miserables a los pobres. Las promesas de Reina habían calado en la población: darle un rostro humano al programa económico y hacer una revolución moral contra la corrupción. (LADB archives: 11/30/93)

Sin embargo, la historia no ha cambiado en el programa impulsado por el nuevo gobierno de Roberto Reina en 1994. De hecho, Reina ratificó el modelo neoliberal con su "Programa Económico de Ajuste" (PAE), acorde a un documento del Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos de Honduras: "La expansión de la pobreza e indigencia se aceleró con la adopción en 1990 y su ratificación en 1994 del PAE neoliberal negociado con los organismos financieros internacionales. El PAE ha confirmado ser un programa recesivo con un severo impacto negativo en la producción, el sector social y en los grupos más vulnerables. Ya en 1992, unas 740,000 personas (44% de la PEA) registraba problemas de empleo y la cifra de los subempleados era de 558,000. Pese a no contar con cifras actualizadas, hay consenso en que esa situación no sólo persiste, sino que se ha agravado. Como trasfondo de este escenario está la injusta y cada vez más extrema polarización que existe en la distribución del ingreso nacional. Baste recordar que el 24% de los hogares pobres devengan apenas el 4% del ingreso nacional" (CNPDHH, 1997)<sup>8</sup>.

---

8

Más datos en este aspecto sobre la situación actual en Honduras son ilustrativos: "El desempleo abierto, por ejemplo, afecta entre un 21% (tasa oficial) y/o un 30% (tasa extraoficial) de la PEA (1.9 millones)... El cuadro es desalentador: un promedio de 73% de la población total se ubica por debajo de la línea de la pobreza, el 63% de las familias están subalimentadas, el 57% de los pre-escolares y el 35% de los niños de primer grado tienen problemas de

El Presidente Reina anunció, en Enero de 1997, un plan especial para aliviar la pobreza en Honduras. Aunque ello parecía sobre todo una postura electoral en relación al proceso de sucesión presidencial en el mes de Noviembre, también fue un reconocimiento de las deficiencias del modelo económico implementado. Volvió a prometer también luchar contra la corrupción, controlar los precios de los granos básicos, construir 15,000 viviendas, ... Al finalizar su gobierno, el Presidente de nuevo entró en campaña a favor de su partido y el nuevo candidato.

Como otros gobiernos en América Latina, Honduras ha tenido cierto éxito en las cifras macroeconómicas; un ejemplo de ello es el crecimiento del PIB en 4% durante 1996, y el descenso de la inflación en 4.6%<sup>9</sup> (comparada con la de 1995) como lo publicita Hugo Noe Pino, el presidente del Banco Central, pero el mismo gobierno reconoce que un 70% de los Hondureños vive en la pobreza (la Iglesia católica habla del 80% en una población de 5.3 millones de hondureños), y todos los consumidores han sido severamente impactados especialmente por los aumentos en los granos básicos y en el costo de la gasolina (LADB archivos. 01/16/97). La devaluación del lempira estuvo a la orden del día: en 1994 estaba 8.6 por 1 dólar; al final de 1996 llegó a 14 por un dólar, lo que significaba una devaluación del 22% en 1996.

El rostro humano que Reina prometió darle a su programa económico no aparece. las palabras de Manuel Zelaya, director del Fondo Hondureño de Inversión Social son ilustrativas: "si no se revisa a fondo el modelo neoliberal, miles de personas morirán de hambre, especialmente en países como el nuestro... El modelo ha tenido catastróficos resultados para las clases pobres y ha concentrado la riqueza en pocas manos" (Idem). Esta decepción ha ocurrido entre la población hondureña desde años anteriores. La Iglesia Católica, aunque combate la abstención e impulsa la participación de la población, mencionaba, por ejemplo, en 1996, a través del semanario Fides, tal decepción en relación al PL, al PN y en general a los partidos políticos: "el ciudadano se considera

---

crecimiento a causa de desnutrición-subalimentación. La situación en las zonas rurales es más precaria, puesto que en ellas la tasa de indigencia se eleva a un 80%; el 60% de las viviendas carecen de servicios básicos y el 84% de sus moradores viven en condiciones de hacinamiento" (CNPDHH, 1997).

9

Según cifras gubernamentales, la inflación en 1996 llegó a 25%, aunque la meta del gobierno había sido sólo el 16%. De hecho, la inflación en Honduras en ese año llegó a ser la más alta de toda América Central (Cfr. Ladb archivos. Ecocentral, 09/05/1996).

defraudado por quienes han ejercido el poder... Al solicitarle su voto, se le han hecho promesas de solución a esta problemática, las cuales han sido incumplidas... Son muchos los ciudadanos que han manifestado públicamente su desencanto por los resultados de su contribución a la actividad política partidista... La decepción se traduce en indiferencia o apatía con respecto a lo que tenga que ver con los partidos políticos, sus activistas y sus candidatos" (Excelsior, 21 Octubre 1996 p.2). Evaluando específicamente el plan económico del gobierno en 1996, la Iglesia católica señalaba que sólo se buscaba "el cumplimiento de las metas establecidas por los organismos internacionales de financiamiento, supuso un endurecimiento de las condiciones de vida de los hondureños debido a una inflación cercana al 24% y la devaluación del lempira" (Fides, en Excelsior, 6 Enero 1977).

También, a principios de 1997, tres organizaciones obreras, la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), la Central General de Trabajadores (CGT) y la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), con alrededor de 600,000 afiliados, de diversas tendencias políticas, instaron a la población en un comunicado a no pagar los servicios públicos en protesta por el programa económico gubernamental y exigiendo la renuncia del Presidente por no haber cumplido sus promesas de campaña: "Reina debe dimitir por la vengenza política de no cumplir sus mínimas propuestas económicas" (Excelsior. 13 Enero 1997). Un mes después, 23 mil empleados públicos paralizaron por un tiempo los 13 ministerios del gobierno exigiendo mejoras salariales ante la negativa a cualquier negociación (Excelsior. 9 Febrero 1977

Con el gobierno de Reina, además, nadie espera modificación en los programas de austeridad. Un ejemplo de ello son los compromisos que el gobierno ha adquirido con el FMI, al firmar en 1997, una nueva carta de intención. Gran parte del problema está en la gravedad del peso de la deuda externa en Honduras. Semejante a 1996, para 1997 el pago en el servicio de la deuda será de 633 millones de dólares, equivalente al 60% de los productos que se exportarán en ese año. Con el objeto de renegociar su deuda con E.U. y con el FMI, el gobierno ha acordado firmar una carta de intención. El Club de Paris y el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo esperarán a ver su cumplimiento en los programas de ajuste para ver si otorgan más créditos. (LADB archives: Ecocentral: 12/19/96). La medida típica del FMI para los gobiernos latinoamericanos ha sido el severo control de los salarios: en Honduras, el salario mínimo para Enero de 1997 se encontraba en 96 dólares al mes.

Se pueden considerar también los hechos de corrupción y violencia acaecidos durante el gobierno del PL. "Nos estamos hundiendo cada vez más en una vorágine de corrupción, violencia y

enfrentamiento", dijo la Iglesia católica a través de su órgano oficial el semanario Fides: "Esta situación genera un ambiente de pesimismo, inseguridad y miedo entre la ciudadanía" (Excelsior, 29 de Julio de 1996). La referencia de esta afirmación se encuentra en numerosos actos de violencia acaecidos durante el primer semestre de 1996 y al descubrimiento de un escándalo de corrupción por venta y tráfico de pasaportes a extranjeros, con la participación de diversos políticos del gobierno y de la oposición.

Por otro lado, la desmilitarización del país seguirá siendo una asignatura pendiente en Honduras. ¿Siguen siendo los militares hondureños un poder independiente y autónomo del poder civil? ¿Siguen siendo impunes a las continuas demandas de violaciones a los derechos humanos? ¿Siguen siendo un sector privilegiado de poder con capacidad de imponer sus decisiones a pesar de no estar en la dirección del gobierno?

Un punto fundamental en la relación de la sociedad hondureña con los militares, independientemente del castigo o impunidad, puede ser el esclarecimiento de la guerra sucia del gobierno y del ejército en contra del llamado enemigo interno bajo la doctrina de la Seguridad Nacional en los años 80s. Las demandas de la sociedad hondureña y en especial de los organismos no gubernamentales que se han dado a la tarea de la defensa de los derechos humanos son muchas: modificación del sistema de impartición de la justicia; subordinación de los militares al poder civil institucional; fin a la impunidad del Ejército hondureño; transformación de la Doctrina de Seguridad Nacional en Doctrina de Defensa Nacional; castigo a los responsables de masacres y violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos, etc. Pero hay que partir del esclarecimiento de los hechos.

En El Salvador, las partes beligerantes auspiciadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aceptaron esta demanda fundamental y se creó la Comisión de la Verdad sobre los sucesos dolorosos y terribles de la guerra<sup>10</sup>. En Guatemala, con los acuerdos de paz de Diciembre de 1996, también hubo un cierto grado de esclarecimiento de los hechos aunque se decretara una amnistía general. Por eso, en Honduras también existe esta demanda fundamental ante la resistencia del ejército a admitir su responsabilidad en la guerra contrainsurgente: "No hay duda que las

---

10

En cumplimiento de los Acuerdos de Paz de 1992, la Comisión de la Verdad de la ONU elaboró el documento "De la locura a la esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador", en donde se mencionó explícitamente a los responsables de las principales violaciones a los derechos humanos.

violaciones a los derechos humanos cometidas en la década de los 80 y la falta de aplicación de la justicia siguen siendo el principal obstáculo a una reconciliación nacional que es imprescindible para consolidar la transición hondureña hacia una democracia no sólo representativa sino participativa" (CNPDHH, 1997).

Los intentos de hacer que el Ejército permanezca impune a las acusaciones de violación de derechos humanos siguen presentes en Honduras, a pesar de las denuncias formales presentadas en contra de personas específicas. Un editorial del diario *Tiempo*, en 1996, es un ejemplo de esta situación. Tres militares prófugos, acusados por la Fiscalía General de haber sido miembros de los escuadrones de la muerte, coronel (r) Alexander Hernández, mayor (r) Manuel de Jesús Trejo, y capitán (r) Billy Joya, "obviamente gozan de plena libertad de movimiento y acción, en desafío a la autoridad judicial. Esto solamente puede ser posible con el consentimiento - si no es que el apoyo- de las autoridades militares, las cuales, de conformidad con la ley, están en la obligación de auxiliar al Poder judicial en la captura de delincuentes o presuntos delincuentes a requerimiento de los jueces" (*Tiempo*, 16 Marzo 1996). Derrotar la impunidad es uno de los principales retos de Honduras para llegar a ser un país democrático en un Estado de derecho<sup>11</sup>.

Sin embargo, la impunidad de los militares persiste en Honduras, a pesar de las promesas que hizo el gobierno del PL. El

---

11

El Dr. Leo Valladares, primer Comisionado Nacional para la Protección de los Derechos Humanos en Honduras en 1992, mencionó lo siguiente, en Washington, el 3 de Octubre de 1996 respecto a la tarea a la que se enfrentó: "Lo que me encontré fue un enorme muro de impunidad. Todos sabían que se habían cometido violaciones a los derechos humanos -detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas de personas- pero lo que era más grave, todas ellas perpetradas o instigadas por las autoridades, con la paradoja, que eran para defender la democracia y nuestra civilización cristiana y occidental, como si la democracia negara la libertad del ser humano para establecer la libertad, o el cristianismo estableciera el odio para establecer el amor. Son estas verdaderas aberraciones que instauraron las dictaduras que América Latina padeció durante la pasada década de los 80s... Creo que para evitar nuevas violaciones a los derechos humanos y que no se repita lo que pasó en América Latina en la década pasada, es buscar siempre la verdad: saber lo que pasó, quiénes lo hicieron, por qué lo hicieron. Sólo con la verdad se puede llegar a la justicia y luego que esta se haya logrado vendrá la reconciliación". Valladares estaba recibiendo el premio de derechos humanos "Letelier-Moffitt", que otorgan los miembros de The Institute for Policy Studies.

Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (COFADEH) declaraba lo siguiente en Enero de 1997: "en un principio creimos que Reina castigaría los crímenes de lesa humanidad cometidos por los militares y, lejos de sancionar a los culpables, el mandatario pretende ahora que el asunto sea olvidado por los hondureños.. Reina no ha cumplido sus promesas y nadie en Honduras asume con gallardía y patriotismo la responsabilidad de eliminar el manto de impunidad que protege a las Fuerzas Armadas" (Excelsior, 6 Enero 1997). La COFADEH exigía específicamente la entrega de 13 oficiales fugitivos encausados por violaciones a los derechos humanos y que eran protegidos por el Ejército.

De hecho, el gobierno de Reina no ha podido subordinar a los militares al poder civil en la nueva situación de Centroamérica. Un ejemplo del primer año de su gobierno ilustra la difícil relación. Reina había prometido en su campaña que el presupuesto del Ejército se moderaría, que se acabaría el reclutamiento forzoso entre los jóvenes y que combatiría la corrupción, especialmente llevando a juicio a funcionarios del gobierno anterior. Ciertamente, en el mes de Mayo de 1994, Reina se había anotado un gran éxito político cuando el Congreso pudo aprobar el fin del reclutamiento forzoso. A pesar de la resistencia de los militares, el gobierno logró el voto unánime del Congreso el 3 de Mayo de 1994 para eliminar el servicio militar obligatorio y convertirlo en un servicio voluntario, educacional y humanístico. El servicio obligatorio era ya una tradición de 30 años en las fuerzas armadas. El tema había sido parte de sus promesas de campaña y representaba una demanda de la población para ejercer el control civil sobre las fuerzas armadas (conocidas por su corrupción, represión y abusos sobre los derechos humanos). Además de la victoria de Mayo, el presidente logró en Junio desbandar la Dirección Nacional de Investigaciones, la policía secreta controlada por los militares

Sin embargo, las contradicciones se acentuaron entre Mayo y Julio de ese año. De hecho, el gobierno de Reina echó marcha atrás en la decisión aprobada por el Congreso, el 3 de Mayo. Los militares forzaron al Presidente y éste tuvo miedo de un golpe de Estado.

La tradición en Honduras es que los militares siempre han podido crecer en número, especialmente en los 80s, con base al reclutamiento obligatorio de jóvenes; por otro lado han mantenido un severo control de la policía, la inteligencia, la lucha antinarcóticos y las agencias de investigación. Ante las acciones del presidente Reina, los militares lo acusaron de querer destruir las fuerzas armadas. Se llegó a una fuerte confrontación verbal entre el Presidente y el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas el 2 de Agosto. El presidente fue acusado por el Gen. Discua de acosar al Ejército con las amenazas de recortar su presupuesto y quitarles

numerosos privilegios. La principal queja era contra la eliminación del servicio militar obligatorio, pero también contra las decisiones del gobierno de no permitir a los militares entrar al sistema de telecomunicaciones nacionales, la inmigración y el departamento de aeronáutica civil, todo ello tradicionalmente controlado por los militares. El Comandante General Mario Hung Pacheco se quejó del recorte del Congreso de 16 millones de dólares que habían dejado al ejército en una "miserable condición".

Un día después del enfrentamiento, el 3 de Agosto, el presidente anunció que recomenzaría temporalmente el reclutamiento forzoso de jóvenes hasta Enero del 95, cuando la legislatura retomara el tema. En la práctica, había ocurrido un golpe técnico de Estado porque los militares se habían mostrado preocupados por el plan a largo plazo del presidente sobre las fuerzas armadas. (LADB archivos: 08/12/1994).

En el mismo contexto, el presidente Reina hizo importantes concesiones al PN para ganar su apoyo, en 1995, durante el proceso de ratificación de la enmienda constitucional para abolir el reclutamiento militar obligatorio. El presidente desbandó la comisión gubernamental que investigaba la corrupción durante el gobierno de Callejas, y al mismo tiempo anunció un incremento en el presupuesto militar. El presidente Reina quedaba en entredicho en sus promesas de erradicar la corrupción y someter a los militares al poder civil.

La decisión sobre el reclutamiento forzoso estaba en el Congreso para su ratificación final, pero requería dos terceras partes de los votos (86) de un total de 128 legisladores. Dado que el PL sólo tenía 71, se necesitaba apoyo de algunos miembros del PN que en total poseía 55 escaños. El líder del PN, Oswaldo Ramos Soto, aspirando volver a jugar como candidato en 1997, después de vaivenes, dijo que votaría contra el draft obligatorio; otros miembros del PN afirmaron tener muchas presiones de los militares. El jefe de las Fuerzas Armadas, Mario Hung Pacheco, dijo que no hacía presiones sólo sugerencias que los legisladores podían entender.

El 8 de Marzo de 1995, el PN anunció que ratificaría la enmienda para terminar el reclutamiento forzoso; el mismo día, el presidente decretó la disolución de la comisión contra la corrupción (había bases para que el Ministerio Público trajera cargos de corrupción contra Callejas<sup>12</sup> y otros miembros de su

---

12

Las acusaciones contra Callejas han sido persistentes durante todo el tiempo posterior a su gobierno. De hecho, en Enero de 1997, la



gabinete). Las dos partes negaban cualquier vinculación entre las dos decisiones. Reina creó una comisión Contra la Violencia y la Delincuencia (con miembros del gobierno, de los militares y sectores religiosos y de la IP) presidida por el Arzobispo de Tegucigalpa, Oscar Rodríguez, pero este declaró que su función no tendría nada que ver con la corrupción. Al mismo tiempo, el presidente anunció aumento del presupuesto para los militares de 35.2 a 49.2 millones de dólares. (LADB archivos: 03/24/95).

Otro intento del Presidente ante la demanda de la sociedad hondureña, ha sido la de lograr la transferencia de la policía del mando militar al control civil. De hecho, en Diciembre de 1996, el parlamento hondureño determinó unánimemente dicha transferencia; era un hecho significativo debido a que las Fuerzas Armadas desde hace más de 30 años controlaban las Fuerzas de Seguridad Públicas (FUSEP) y todo su presupuesto, a pesar de tener numerosas acusaciones de vínculos con el crimen organizado. Los 5,400 elementos del FUSEP, mediante una enmienda constitucional, pasaban al poder civil. Sin embargo, el traspaso durante 1997 seguía pendiente porque el mismo Congreso no expedía la legislación correspondiente y, paralelamente, había autorizado un presupuesto del FUSEP por 3.1 millones de dólares, sin legislar la transferencia. Mientras tanto, la ola de crímenes, asaltos, secuestros, robos y asesinatos continuaron de tal manera que, con las fuertes protestas de los industriales y hombres de negocios, el presidente autorizó que las Fuerzas Armadas, en Mayo de 1997, salieran a patrullar las calles de las principales ciudades, particularmente Tegucigalpa y San Pedro Sula. Según Ramón Custodio, presidente de la CODEH, podía tratarse de una estrategia de los militares para hacer sentir la necesidad de su presencia en todo Honduras (LADB archivos. 05/08/1997); él mismo había ya denunciado anteriormente a por lo menos 20 exmiembros del Ejército como responsables de secuestros de empresarios, atentados, asaltos y asesinatos: "los recientes actos de delincuencia en Honduras, que suman más de 80, tienen todas las características de operativos militares. Disponemos de evidencias de que esas acciones criminales han sido ejecutadas por exmilitares expertos en explosivos, rescatar rehenes, proteger dignatarios y son excelentes francotiradores" (Excelsior. 3 Febrero 1997).

Se puede decir que Honduras después de la guerra en

---

Corte Suprema de Justicia pidió al Congreso suspender la inmunidad del expresidente y de su exministro de Comunicaciones y Obras Públicas y Transporte, Mauro Membreno, por la venta subvaluada de maquinaria estatal de construcción. En ese tiempo, gozaba de inmunidad por ser miembro de Parlamento Centroamericano (Excelsior. 10 Febrero 1997).

Centroamérica no ha despegado hacia un modelo autónomo de desarrollo. Sigue conservando las características estructurales que la convirtieron en "república bananera" dominada por las transnacionales y los militares, aunque con la cara de los gobiernos civiles en un bipartidismo consolidado. La desmilitarización del país y el combate a la impunidad siguen siendo las demandas fundamentales de Honduras y, junto con ello al igual que en el resto de América Latina, se necesita urgentemente un cambio urgente en el modelo económico neoliberal implementado. Son las organizaciones en defensa de los derechos humanos y las organizaciones laborales y populares las que podrán emerger como nuevos actores para poder iniciar esta transición. Y en este contexto, los procesos electorales, como parte tan solo de la transición democrática, se están presentando en este fin de siglo como escenarios privilegiados en la búsqueda de los cambios en esa correlación de fuerzas específica.

Para las elecciones del 30 de Noviembre de 1997 (donde se eligió presidente de la República, 128 diputados, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, y 295 alcaldías), el PL había postulado como candidato presidencial a Carlos Flores (presidente del Congreso, y quien, en 1989, fue derrotado por el PN, quien había postulado a Callejas); el PN, por su parte, postuló a la profesora Nora Gunera de Melgar, que fue alcaldesa de Tegucigalpa en 1990 y es viuda del dictador Juan Melgar Castro que gobernó de 1975 a 1978, aunque sus contrincantes perdedores dentro del PN en la elección interna, la acusaron de fraude electoral. Fue un hecho significativo que sectores del propio PN hayan pedido un recuento de votos con mediación del jefe de las Fuerzas Armadas, Mario Hung Pacheco.

Otros tres partidos compitieron con candidatos a la presidencia: dos minoritarios ya tradicionales como el Partido de Inovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) con Olbán Valladares, y el Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH) con Arturo Corrales; y además, el nuevo escenario de centro izquierda con el Partido de Unificación Democrática, que había postulado a Matías Funes (LADB, Vol. 2 No.41, Dic.4,1997). Sin embargo, estos tres en conjunto sólo consiguieron cerca del 5% de la votación general, consiguiendo sólo pocas diputaciones y algunas victorias locales como la que conquistó el PUD en la alcaldía de la ciudad de La Paz.

Las elecciones presidenciales en Honduras en Noviembre de 1997 -la 5a. Elección consecutiva después de los gobiernos militares desplazados en 1982- fueron una expresión más del bipartidismo del país: el PL, identificado con los sectores empresariales, y el PN, aliado tradicional de los militares, se disputaron la mayoría de la votación: Flores logró el 53% de los votos; la Sra. Melgar el 43%. El PL, además, logró el control de la mayoría de la Asamblea

Nacional con 67 escaños por 54 del PN, dejando 7 diputaciones para los otros partidos minoritarios. El PN por su parte permaneció como la segunda fuerza nacional y obtuvo la victoria significativa de la alcaldía de la capital Tegucigalpa con su candidato César Castellanos, quien derrotó al liberal Herman Padgett.

Aunque el proceso sufrió de una gran desorganización (como la llegada tarde de numerosos funcionarios del Tribunal Nacional Electoral) y hubo un gran problema con las credenciales de elector (se permitió votar con credenciales antiguas o nuevas, debido a que éstas últimas no estuvieron todas listas), la opinión generalizada de los observadores electorales no reportó evidencias de fraude. Lo que sí sorprende es la inversión tan alta en las campañas electorales de los dos principales partidos, que hacen sospechar sobre posibles aportes del narcotráfico; legalmente no hay límite en tales inversiones y tampoco es obligatorio aclarar la procedencia del dinero. "En la actual campaña preelectoral, ambos partidos han llegado a invertir hasta 200 millones de lempiras (más de 15 millones de dólares), el doble de lo que costó la campaña de 1993" (Herrán Claudia. Público. 30 Nov.1997).

Carlos Flores Facusse presenta el perfil clásico del PL: pertenece a una familia empresarial de la industria textil y de bienes raíces; está casado con una estadounidense; tiene estudios de ingeniería industrial, un posgrado en economía y un doctorado en letras y humanidades; trabajaba recientemente como editor del diario La Tribuna y era presidente de la Cámara Legislativa. Asumió la presidencia de Honduras el 27 de Enero de 1998, con un discurso y promesas que se parecen a las que hizo su antecesor Roberto Reina en 1994: combatir la pobreza, la corrupción y la impunidad, pero ahora en el concepto de "la Nueva Agenda" para Honduras.

El nuevo presidente, sin embargo, está atado al mismo programa económico: defiende el mismo modelo pero queriendo evitar "los sacrificios que se exigen de los muchos en beneficio de los pocos"; esta crítica se la hizo directamente a su antecesor por no haber podido darle un rostro humano a la economía ya que "el número de hondureños viviendo en la pobreza aumentó de 72% de la población al 80% durante su presidencia" (LADB. Vol 3 No.5. Feb.5,1998).

En Honduras, así, en 1998 se repite el mismo escenario del anterior periodo presidencial: el mismo partido logró continuidad en el poder ejecutivo; el PN se sigue ostentando como el principal partido opositor con gran influencia de los militares; problemas estructurales de corrupción y pobreza que se levantan permanentemente como bandera ideológica por los gobernantes sin tener capacidad para afrontarlos; escaso margen de acción gubernamental ante las presiones del FMI y el gran problema de la deuda externa. En este sentido, no habrá alguna Nueva Agenda para

Honduras en los próximos 4 años sino más del mismo programa neoliberal de ajustes pero ahora con una fasceta más empresarial y menos énfasis en los derechos humanos.

#### **BIBLIOGRAFIA:**

Barry Tom and Preusch Deb, 1986  
The Central America Fact Book  
Grove Press, New York. USA

CECARI, 1987  
Revista del Centro de Estudios Centroamericanos de Relaciones Internacionales. Cuadernos No.3. México, D.F. Mayo 1987 Artículo del Instituto de Estudios Socioeconómicos de Honduras (Inseh): "Honduras: el sacrificio de una nación para una estrategia sin sentido".

CEDOH, 1986  
Honduras. Realidad Nacional y crisis regional. Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), Universidad Internacional de La Florida. Tegucigalpa, Honduras.

CONADEH, 1996  
Pobreza y VIH/SIDA. Una reflexión general. Documento puesto en línea el 3 de Diciembre de 1996 por el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos de Honduras (<http://www.us.net/cip/cdh/sida02.htm>).

CNPDHH, 1997  
Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos en Honduras. Sección Documentos: "Los derechos humanos, tan conocidos y tan poco respetados". 26 Marzo de 1997. (<http://WWW.us.net/cip/cdh/1210.htm>)

ENVIO, 1990,91,92,93,94  
Publicación de la Universidad Centroamericana y del Instituto Histórico Centroamericano. Managua, Nicaragua.

FIDES, 1996  
Semanao católico. Tegucigalpa, Honduras. 17 Noviembre 1996.

LADB, 1994, 1995, 1996, 1997  
Latin America Data Base. Archivos basados en cables de la Agencia Centroamericana de Noticias, EFE, Reuter, France-Presse, Inforpress Centroamericana, Notimex, Central America Update, El tiempo de Honduras, sobre América Central (Ecocentral) y sobre América del Sur (Notisur). University of New Mexico. Albuquerque, N.M., USA.

Medina Núñez Ignacio (compilador), 1997  
Centroamérica en el fin de Milenio. Fondo Editorial Universitario.  
Ediciones de la Noche. Guadalajara, Jal. Artículo de Silvia  
Lailson: "El papel de Honduras en el conflicto centroamericano".

Vergara M. Raúl, Vargas C.Jorge, Castro Rodolfo, Barry Deborah y  
Leis Raúl. 1987. Centroamérica, la guerra de Baja Intensidad.  
CRIES, Departamento Ecuménico de Investigaciones. San José, C. R.